

C.A. de Santiago

Santiago, treinta de abril de dos mil veintiuno.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Comparece Elys Joel Ortíz Hernández, en representación de sus hijos menores de edad Joel y Elian David, ambos de apellidos Ortíz Carreño, de 15 y 9 años de edad, deduciendo acción de amparo en contra del Consulado General de Chile en Caracas y en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en el cierre de la solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática de los amparados, solicitando que estas actuaciones se dejen sin efecto y en su lugar se disponga continuar con la tramitación de las visas respectivas de los amparados por los motivos de hecho y derecho que expone

Señala que es un ciudadano extranjero residente en Chile, radicándose en Chile, con el fin de encontrar una mejor calidad de vida, de la cual se vieron privados a raíz de la grave crisis humanitaria y política en Venezuela.

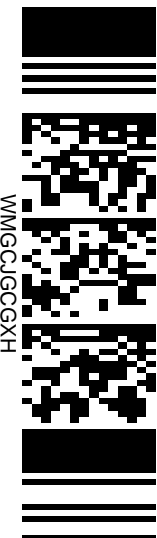
Indica que ingresó de manera regular a Chile en agosto de 2019 con el fin de asentarse para posteriormente traer a sus hijos y a su esposa, quien ingresa a Chile en septiembre de 2019.

Explica que debido a que ambos consiguieron trabajo rápidamente y se estabilizaron en el país, en febrero de 2020 solicitaron la Visa de Responsabilidad Democrática para sus hijos (los amparados). En mérito de haber adjuntado toda la documentación exigida por la autoridad, con fecha 26 y 27 de abril de 2020 el Consulado General de Chile en Caracas le comunica que se le daría curso progresivo a la solicitud de visa de sus hijos, ordenándole que la entrega de los documentos de los menores debía realizarse entre el 5 y 7 de abril de 2020, en el caso de uno de los amparados, y el 19 y 21 de abril del 2020 en el caso del otro amparado.

Afirma que debido a la emergencia sanitaria, el Consulado General de Chile en Caracas señaló a todos los postulantes que las citas otorgadas posterior al 16 de marzo de 2020 serían reagendadas, lo que en su caso no ha sucedido a la fecha.

Relata que mientras se encontraba a la espera del correo de reagendamento de cita, recibió un correo de carácter masivo que le señala que la visa de los amparados habrían sido rechazadas, esto a pesar de que éstos se encontraban en la etapa final del procedimiento.

Expone que el correo recibido fue el siguiente:



*“Con motivo de la crisis sanitaria producto del SARS - CoV 2. mediante el Decreto Supremo Nro. 102 de 16 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se decretó el cierre de fronteras que impidió el ingreso de numerosos extranjeros al país, con la consecuente suspensión de sus procedimientos de visación.*

*Habiéndose prolongado en el tiempo la necesidad de mantener dicho cierre, se ha excedido con ello el plazo exigido para la finalización del procedimiento administrativo, lo que corresponde, además, al criterio adoptado en diversos fallos por los Tribunales de Justicia, en el sentido que, de existir un retardo en su tramitación, debe dictarse el correspondiente acto terminal conforme a lo dispuesto en la ley. Por ende de conformidad a lo previsto en el artículo 63 del Decreto Ley N°1 094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile, se deberá rechazar una solicitud de VISA DE RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA por concurrir alguna de las causales contenidas en dicha disposición legal.*

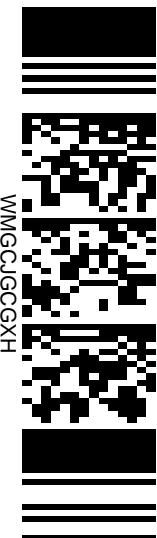
*En el presente caso, corresponde rechazar dicha solicitud en virtud de la causal establecida en el artículo 63 N° 1 del DL 1094 en relación con los artículos 2 y 15 N° 7 del señalado cuerpo legal, así como de los artículos 1 y 2 del Decreto Supremo N° 102 de 16 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual dispuso el cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros por emergencia de salud pública, por brote de Coronavirus.*

*Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, en caso de variar las circunstancias tenidas a la vista, se podrá volver a pedir visación, cumpliendo con los requisitos que establece la ley, para lo cual se tendrá en especial consideración las solicitudes fundadas en reunificación familiar directa, cuando corresponda.*

*Durante las próximas semanas usted recibirá correo electrónico registrando la correspondiente resolución de rechazo”.*

*Señala que el cierre de solicitud de visa que indica el correo previamente individualizado fue enviado de manera masiva a todas las personas postulantes de la Visa de Responsabilidad Democrática sin ningún tipo de distinción, inclusive a aquellas que tenían sus visas aprobadas o se encontraban en la última etapa del procedimiento como los amparados.*

*Asimismo, según se desprende del correo electrónico enviado por la Cancillería, se señala que la resolución de "rechazo" sería enviada durante los próximos días. Sin embargo, tal resolución nunca llegó ni fue*



oportunamente notificada a pesar de haberse pacientemente esperado, por lo que nunca fue posible recurrir administrativamente de la medida.

Asegura que desde su ingreso a Chile y el de su esposa, se han dedicado únicamente a intentar estabilizarse en el país para traer a sus hijos, contando actualmente con trabajo estable y una remuneración suficiente, encontrándose a la espera de la aprobación de su permanencia definitiva, por lo que queda claro su compromiso y deseo de asentarme en Chile junto a su núcleo familiar. Así las cosas, la decisión de la autoridad sólo viene a interrumpir, sin criterio alguno frente a la situación concreta de las personas que afecta, el anhelo de los amparados de reunificarse y disfrutar de las oportunidades que Chile brinda a las personas extranjeras.

Solicita ordenar dar curso progresivo a las solicitudes de visas respectivas dentro de un plazo no mayor de 30 días o el que prudencialmente se fije.

**Segundo:** Que informando Julio Fiolzuñiga, Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior solicita el rechazo del recurso por los siguientes motivos:

a) El proceso administrativo de tramitación de la visa solicitada aún no ha concluido, requiriendo los elementos de cognición necesarios para una acertada resolución del asunto. b) La Administración en general, y el Servicio Consular de Chile en el exterior en particular, no han podido funcionar con normalidad durante los años 2020 y 2021, debido a las restricciones sanitarias vigentes en Chile y en Venezuela. c) El derecho alegado por la recurrente no es indubitado, más aún si la esfera de libertad ambulatoria reclamada se encuentra delimitada conforme a los contornos que la Carta Fundamental prevé sobre el particular.

Explica que a partir del mes de diciembre de 2019 se ha producido la contingencia sanitaria por el brote de coronavirus, lo ha traído consigo la dictación de una serie de medidas que pasa a indicar, entre las que se encuentra la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública y el cierre de todos los lugares habilitados para el tránsito de extranjeros hacia el territorio nacional.

Acto seguido se refiere a las condiciones de funcionamiento del Consulado General de Chile en Caracas, manifestando que con fecha 13 de marzo de 2020 la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela se estableció en ese país el estado de alarma para todo su territorio, en atención a las circunstancias excepcionales, extraordinarias y coyunturales.



En este sentido, indica que la aplicación de las medidas restrictivas por parte de las autoridades venezolanas incidieron significativamente, tanto en lo que respecta a la atención de público como también en tomo al cumplimiento de las reglas sobre suspensión de actividades y de aforo.

Señala que la adopción de las normas por la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 55 de la CVRC, tienen incidencia directa y necesaria en tomo al otorgamiento de visas por parte del Estado de Chile en dicho país, pues si bien la solicitud puede iniciar telemáticamente el procedimiento de rigor, la revisión presencial de los documentos conexos a la petición es esencial y determinante para su resolución, por lo que ante las medidas dispuestas por las autoridades locales, no fue posible continuar la sustanciación del procedimiento de forma regular, atendida a la interferencia regulatoria de esas autoridades a partir de la declaración del Estado de Alerta

Refiere que a partir de este contexto, y dado el largo tiempo transcurrido desde que se decretó el estado de excepción constitucional en Venezuela, y ante la imposibilidad de efectuar cualquier tipo de atención regular (producto de las circunstancias excepcionales que provocó la pandemia), el citado Consulado General solicitó, en diversas oportunidades, a la Cancillería venezolana indicar si, a la luz de las disposiciones del estado de alarma y sus prórrogas, existía la posibilidad de continuar con la prestación de servicios consulares. De hecho, en octubre de 2020, la Cancillería venezolana comunicó por vías informales que las labores consulares se encontraban enmarcadas en el sistema "7+7" y que debían desarrollarse de esa forma. Este sistema de funcionamiento por turnos, consiste en un plan para orientar el trabajo de la población durante siete días continuos, dentro de los parámetros de la semana de flexibilización y luego, retornar a siete días seguidos de cuarentena radical, en los cuales el desplazamiento interno se encuentra supeditado al uso de salvoconductos que den cuenta de una extrema necesidad de salir del lugar de habitación.

Concluye que como consecuencia de las medidas restrictivas adoptadas por Venezuela, el aludido Consulado General no pudo atender público de forma presencial entre los meses marzo y octubre de 2020, unido a la circunstancia de que se había dispuesto la prohibición de ingreso de extranjeros al país. Esta imposibilidad generó como resultado que se acumulara un importante número de solicitudes nuevas que -atendidas las circunstancias- no era posible tramitar. Posteriormente, luego de la



información recibida por la Cancillería venezolana, fue posible continuar con los trámites presenciales que las solicitudes de visa requieren, dando así continuidad a la revisión física de los documentos y la citación de las personas que ello conlleva, observando en todo momento las normas que Venezuela ha establecido al efecto y considerando las limitaciones que posee el Consulado General de Chile en Caracas para atender a público, teniendo especialmente en cuenta las capacidades humanas y estructurales limitadas de la citada Representación Consular.

Añade que el Consulado General de Chile en Caracas se encuentra ubicado en el tercer piso del Edificio "Venezuela", y cuenta con una dotación de 16 funcionarios: 10 de ellos son contratos locales, 2 administrativos y 4 son miembros del Servicio Exterior. En las circunstancias descritas, no fue posible dar trámite a muchas solicitudes, por cuanto la dotación del Consulado General no era suficiente para efectuar la tramitación presencial (revisión de documentos originales) de la gran magnitud de solicitudes de visas pendientes, pese a que se continuaba -dentro de lo posible-atendiendo de forma telemática.

Explica que tuvo que optimizar los recursos humanos disponibles y, de esta manera, sobre la base de las prioridades dispuestas por esta jefatura, debió atender la contingencia derivada del brote mundial del SARS-CoV-2, con preferencia a la atención de los connacionales en el exterior.

Señala que aun cuando los servicios consulares se fueron prestando, incluyendo la tramitación de las solicitudes de visas y vistos de turismo, no hay que desconocer que estas circunstancias extraordinarias -tanto de fuerza mayor como de caso fortuito- relativizan o atenúan los mandatos de optimización que se derivan de los principios de eficiencia y eficacia a que se aluden en el inciso segundo del artículo 3 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, más aún si se toman en cuenta los medios humanos disponibles y de las medidas adoptadas por las autoridades de Venezuela y Chile, dentro del contexto del brote mundial del SARS-CoV-2.

Analizando la naturaleza jurídica del correo electrónico que fuera enviado al recurrente de autos, asegura que aquel no constituyó más que la comunicación de un cierre o suspensión informática, debido a la necesaria priorización de labores que tuvo que efectuar la Secretaría de Estado, debido a la crisis sanitaria mundial que ha generado el virus SARS-CoV-2, gatillando



las circunstancias extraordinarias que han alterado el normal funcionamiento del servicio.

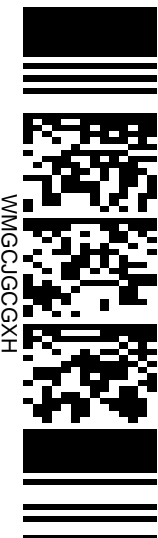
Añade que junto al correo enviado, se comunicó públicamente la priorización de la tramitación de las VRD de reunificación familiar, las que siguen tramitándose con normalidad, atendidas las situaciones de extrema necesidad que las mismas abrigan.

Concluye que el correo electrónico no debe ser considerado como acto administrativo terminal, por cuanto el mismo constituye una sola comunicación para atenderla situación general de caso fortuito o fuerza mayor.

Explica que el procedimiento de tramitación de Visa de Responsabilidad Democrática no ha concluido para el caso de autos, por cuanto (1°) no existe una resolución del Cónsul General de Caracas otorgando o denegando la solicitud del recurrente; (2°) si se ordenare la continuación de la tramitación del procedimiento administrativo sería ineficaz ya que esta no se ha paralizado, solamente se ha extendido por motivos de caso fortuito o fuerza mayor; y, (3o) lo más elemental, si se ordenare el otorgamiento de la visa, si así lo hubiera solicitado la recurrente, significará obviar la etapa de cognición que la autoridad consular debe realizar para resolver dicha petición, habida consideración de que el derecho que se invoca no es indubitado.

En relación a esa etapa de cognición, señala que, para evitar las interferencias regulatorias antes indicadas, y en especial la vigencia temporal del certificado de antecedentes penales que el solicitante debe presentar al momento de formular su solicitud de visa, y cuya duración, es de un máximo de tres meses, producía el efecto de que, al momento de discernir sobre la aprobación de la visa, dicha certificación hubiera perdido su vigencia, debiendo la autoridad consular rechazar ese requerimiento en conformidad a lo dispuesto en el artículo 55 de la CVRC (Convención de Viena sobre Relaciones Consulares)

Por otra parte, advierte que por haber presentado la solicitud de visa, el recurrente o por quien actúa en su favor no adquiere el derecho a obtener dicha visación para residir en Chile. El requirente está sometido a cumplir ciertas condiciones objetivas que dispone la normativa citada en los capítulos anteriores, para obtener eventualmente la autorización por parte de la autoridad consular competente. El único derecho que se configura para el administrado por haber presentado una solicitud de visa ante el Consulado



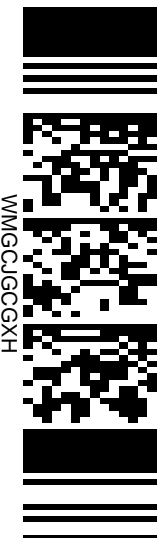
respectivo, es el de obtener una respuesta por parte de la autoridad consular, la que podrá ser eventualmente impugnada por las vías legales o administrativas correspondientes.

Agrega que no se ha configurado el derecho constitucional del artículo 19 Nº 7 letra a) de la Constitución Política de la República de ingresar a Chile; por cuanto éste establece que las personas tendrán el derecho de entrar y salir del territorio de la República en la medida que cumplan con las normas establecidas en la ley y salvando siempre el perjuicio de terceros. Para el caso de los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela, dicho derecho se configurará para entrar en calidad de turista o residente una vez que obtengan la visa o visto de turismo correspondiente.

Por último, señala que conforme al Decreto Supremo 82 de 1 de abril de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Público que modifica el artículo 2 del Decreto Supremo 102 de cierre de fronteras, se impide el ingreso de extranjeros no residentes de manera regular en Chile (salvo excepciones específicas regladas en este), lo cual constituye una prohibición de ingreso al país y de rechazo de visa imperativas, conforme a las siguientes normas del DL 1094, Ley de Extranjería.

Estima que en la práctica, lo que está ocurriendo, es que los ciudadanos venezolanos están utilizando a la judicatura como una herramienta para acelerar y suplir sus trámites administrativos de visa, permitiéndoles obtener visaciones por esta vía, en lugar de requerirlas frente a la autoridad encargada por ley para ello, cumpliendo con los requisitos que la normativa migratoria señala.

**Tercero:** Que, según dispone el artículo 21 de la Constitución Política de la República, todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, y



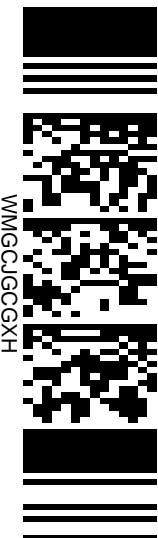
corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija.

El mismo recurso y en igual forma, termina el precepto, podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

**Cuarto:** Que, conforme lo dicho y de la atenta revisión del contenido de las alegaciones consignadas en las presentaciones de ambas partes, al tratarse lo cuestionado de una decisión de la autoridad competente que declaró el cierre de la solicitud de visas de responsabilidad democrática por haber expirado su vigencia, con arreglo a las disposiciones legales y administrativas en que se funda, respecto de ciudadanos extranjeros que actualmente no residen en Chile, sin que ninguna de ellas se encuentre arrestada, detenida o presa con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, no se advierte en la especie, la existencia de una privación, perturbación o amenaza a su libertad o seguridad, por lo que, al no darse el supuesto básico que hace procedente la vía ejercida, el presente recurso no podrá prosperar, sin perjuicio de las demás vías jurisdiccionales y/o administrativas que puedan corresponder al efecto, no resultando necesario pronunciarse sobre las demás alegaciones planteadas por las partes.

**Quinto:** Que, de lo antes expuesto se colige, además, que no existe la actuación arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, desde que las medidas contra las que se recurre corresponden a un acto emanado de autoridad competente, en un caso previsto por la ley y en el marco de las facultades que la misma normativa establece y, además, se enmarcan en una situación excepcional, cual es, por un lado la pandemia mundial y, por el otro, el estado de excepción constitucional decretado en nuestro país, a lo que se agrega que la decisión atacada no constituye una definitiva, sino temporal mientras se mantengan las condiciones excepcionales a que se ha aludido..

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **se rechaza**, sin costas, el recurso de amparo deducido en favor de Joel y Elian David, ambos de apellidos Ortiz Carreño, en contra de la Dirección General de Asuntos





Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, en representación del  
Consulado de Chile en Caracas y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

**Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelar.**

**N°Amparo-1274-2021.**



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Maria Soledad Melo L., Fiscal Judicial  
Javiera Veronica Gonzalez S. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, treinta de abril de dos mil veintiuno.

En Santiago, a treinta de abril de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución  
precedente.

